



Rama Judicial del Poder Publico

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

D.E.I.P. Barranquilla, diciembre 13 de 2021.

Radicado	08-001-3333-006-2018-00222-00
Medio de control	Reparación Directa
Demandante	Moisés Elías Vargas Galofre y Otros
Demandado	Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional de Colombia
Juez	Lilia Yaneth Álvarez Quiroz

1.- Pronunciamiento.

Procede el Despacho a dictar sentencia dentro la demanda promovida mediante las formalidades del medio de control de Reparación Directa, interpuesta por Moisés Elías Vargas Galofre, Jesús Ramiro Vargas Lara, Cenit Esther Galofre González, Lilia Luz Vargas Galofre, José Ramiro Vargas Galofre, María Encarnación Lara Castro, Saúl Francisco Galofre Orellano, José Vargas Saltarín y Virginia González de Galofre, contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional de Colombia, de conformidad con los artículos 181 y 187 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

2.- Antecedentes.

2.1.- Pretensiones.

Las pretensiones de la parte accionante se transcriben de la siguiente manera:

*“PRIMERA Que, la NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA [son]administrativamente responsable de los perjuicios materiales, a la salud, morales y de alteración grave a las condiciones de existencia que les fueron causados [a] mis poderdantes con ocasión de las lesiones y daños corporales sufridos por MOISES ELIAS VARGAS GALOFRE, mientras prestaba su servicio militar obligatorio en el BATALLON DE POLICÍA MILITAR N° 2 DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.  
(...).”.*

Como consecuencia de la anterior declaración, que se condene a la encausada a que reconozca y pague los eventuales perjuicios irrogados a los demandantes resumidos así: por perjuicios morales la suma consolidada de \$442.620.000.oo. o 600 salarios mínimos mensuales legales vigentes y como daño a la salud la suma de 400 smmlv, además de los perjuicios por lucro cesante consolidado y futuro y daño emergente.

2.2. Hechos.

Los hechos relevantes se resumen de la demanda de la siguiente manera:

*Que el señor “Moisés Elías Vargas Galofre, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 1.047.236.577, ingresó a prestar su servicio militar obligatorio en el EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA, integrando el tercer contingente del 2015, de Soldados Bachilleres”.*

Explica que la familia del mencionado señor Vargas Galofre, está conformada por su mamá, su papá, sus dos hermanos y sus abuelos, quienes son los demandantes; además de ello,

que el mencionado exmilitar estuvo vinculado a la Fuerza como soldado conscripto, en el Ejército Nacional en la Unidad Batallón de Policía Militar N° 2 de la ciudad de Barranquilla, para lo cual, *“fue sometido, al igual que el conjunto de personas que hacen parte de su contingente militar, a las rigurosas pruebas médicas, físicas y psicológicas”* exigidas por la Ley 48 de 1993.

Asegura que *cuando* el conscripto Moisés Elías Vargas Galofre, se encontraba *ad portas* de su licenciamiento y reincorporación a la vida civil, fue trasladado a una base militar ubicada en los alrededores de la Central de Abastos de Barranquilla – Gran Abastos. Añade que, en fecha 29 de noviembre del 2015, el comandante de la unidad militar, teniente efectivo Alexander Sánchez Franco, le otorgó permiso al soldado regular Vargas Galofre, *desde las 07:00 horas hasta las 16:00 horas*, para lo cual se le expidió la correspondiente boleta de salida, suscrita por el mencionado oficial y ese mismo día salió de la Unidad Militar a disfrutar del permiso y se dirigió al municipio de Galapa – Atlántico, en la zona rural de dicha localidad, conocida como Vereda Guaimaral.

Comenta que cerca de las tres de la tarde (03:00 P.M.) de ese 29 de septiembre, el señor Moisés Elías Vargas Galofre le solicitó un favor a un amigo que reside en la misma vereda, de nombre Wilmer Alexander Hurtado Pedraza, para que lo transportara hasta cerca de la Unidad Militar, en donde prestaba el servicio obligatorio; por ello se dirigieron en una motocicleta de éste último. Acto seguido la motocicleta en la que se transportaban desde la vereda Guaimaral hasta el casco urbano de Galapa, sufrió un accidente, al perder el control el conductor de la misma.

Indica que, del accidente relatado anteriormente, no quedó constancia o registro alguno por parte de los organismos de tránsito ni de policía, *pues éstos nunca llegaron al lugar de los hechos*, por lo tanto, quienes auxiliaron a los afectados fueron las personas del sector, que lo trasladaron en un carro particular a la Clínica Del Sol en la ciudad de Barranquilla, en la misma fecha de la ocurrencia del siniestro vial.

Relata que debido a la gravedad de las múltiples heridas, el soldado Vargas Galofre fue trasladado de la Clínica del Sol a la Organización Clínica General Del Norte, donde el diagnóstico inicial se definió como *“Trauma Raquiomedular Dorsal con fractura de cuerpos vertebrales dorsales T4-T5 asociado a fractura de los arcos posteriores más listesis grado uno de T3-T4”*, lo que a fin de cuentas se traduce, según el apoderado demandante, en que *“la vida de moisés se postró y se redujo a una cama o silla de ruedas”*, en tanto que el paciente perdió movilidad de la cintura para abajo, tiene incontinencia de sus esfínteres *“y requiere de cuidados de terceras personas para realizar sus necesidades básicas”*. Añade que tales lesiones son de carácter permanente e irreversible.

Expresa que, una vez enterados del accidente, el Comandante del Batallón de Policía Militar No. 2 de la ciudad de Barranquilla llevó a cabo el levantamiento de un *informativo administrativo por lesiones*, y calificó el origen de las lesiones y secuelas sufridas por el afectado, según el literal "D" del artículo 24 del Decreto 1796 del 2000, es decir, que las lesiones sufridas por el militar afectado lo fueron en situación de *actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden superior*. Así:

*“ARTICULO 24. INFORME ADMINISTRATIVO POR LESIONES. Es obligación del Comandante o Jefe respectivo, en los casos de lesiones sufridas por el personal bajo su mando, describir en el formato establecido para tal efecto, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las que se produjeron las lesiones e informarán si tales acontecimientos ocurrieron en una de las siguientes circunstancias:  
(...)”*

- a) *En el servicio, pero no por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad y/o accidente común.*
- b) *En el servicio por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad profesional y/o accidente de trabajo.*
- c) *En el servicio como consecuencia del combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional.*
- d) *En actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden superior.*

*En todo caso los organismos médico-laborales deberán calificar el origen de la lesión o afección."*

Señala que "(...) De acuerdo con el informe rendido por el señor TE. SANCHEZ FRANCO ALEXANDER, comandante de compañía DAGA, manifiesta los hechos ocurridos el 29 de noviembre siendo aproximadamente las 15:30 horas SLB. VARGAS GALOFRE MOISES ELIAS, identificado con cedula N° 1.047.236.577. Quien se encontraba de permiso autorizado por el comando de la compañía sufre accidente en moto particular en el municipio de galapa atlántico[sic], es llevado por urgencia a la clínica EL SOL LTDA(...)"

Afirma que dicho Informe Administrativo de Lesiones comporta errores en la modalidad de la calificación de las lesiones y afectaciones en la humanidad del soldado afectado, que, para la parte actora no cabe duda alguna que Moisés Elías Vargas Galofre, "salió del batallón a disfrutar de un permiso, con una orden (boleta de salida) autorizada y firmada por sus superiores, que el accidente de tránsito que sufrió se dio a eso de las 15:30 horas cuando precisamente se dirigía a presentarse ante su batallón o unidad militar(...)"

Asegura que el joven Moisés Elías Vargas Galofre, al momento de sufrir el siniestro que lo terminó postrando en una silla de ruedas, se encontraba de permiso otorgado por la comandancia de la unidad militar, que no se encontraba realizando acto ilícito alguno, o en contravención a los reglamentos y estatutos que rigen el servicio militar obligatorio, *tampoco se encontraba contraviniendo la orden de un superior*", como lo señala el mencionado Informativo Administrativo de Lesiones.

Advierte que, para el caso del afectado, el Informe Administrativo debió calificarse el origen de las lesiones aplicando el literal "b" o el literal "a", es decir, bien por enfermedad o accidente laboral o no laboral. En ese orden considera el apoderado de la parte actora que para el caso del señor Vargas Galofre la entidad accionada debió dar aplicación a lo establecido en los artículos 24 y 31 del Decreto 1796 de 2000 y catalogar las lesiones e incapacidades sufridas por la víctima como un accidente de trabajo, en tanto que se define por el artículo 31 del mencionado cuerpo normativo como "todo suceso repentino que sobrevenga en el servicio por causa y razón del mismo, que produzca lesión orgánica, perturbación funcional, la invalidez o la muerte.

*Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes impartidas por el comandante, Jefe respectivo o superior jerárquico. O durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente lo es el que se produce durante el traslado desde el lugar de residencia a los lugares de labores o viceversa, cuando el transporte lo suministre la Institución, o cuando se establezca que la ocurrencia del accidente tiene relación de causalidad con el servicio".*

Igualmente estima que "En virtud de lo anterior podemos manifestar que en atención a que el joven MOISES, se encontraba de permiso, autorizado por sus superiores, mencionado accidente "tiene relación de causalidad con el servicio" por ello lo sucedido corresponde a la

*calificación de literal "B" según la parte final del artículo 31 decreto 1796 del 2000, por considerarse un accidente de trabajo".*

En ese orden a juicio de la parte actora, las secuelas producidas en el accidente camino a la unidad militar donde prestaba sus servicios el señor Moisés Vargas Galofre se puede catalogar como un accidente que dejó secuelas en el servicio [militar] pero no por causa y razón del mismo, en otras palabras accidente / enfermedad de origen común al considerar que *disfrutar de un permiso es un acto del servicio militar y principalmente porque el soldado no se evadió o se bolo [sic] del batallón sin permiso, porque no desobedeció orden de su superiores, pero sobre todo no ha cometido ningún delito o violado algún reglamento o norma del EJÈRCITO NACIONAL"*

Señala que la calificación de la causa de las lesiones que llevó a cabo el ente accionado al elaborar el informe administrativo por lesiones estableciendo la etiología de las mismas en el literal "d" del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000, fue injusta, razón por la cual interpuso una demanda ante esta Jurisdicción, seguida por las formalidades del medio de control de Nulidad y restablecimiento del derecho, el 22 de noviembre de 2017.

Asegura que el 28 de noviembre de 2016, la Dirección de Sanidad del Ejército, en una Junta Médico Laboral, determinó una disminución de la capacidad laboral del ciento por ciento (100%) del señor Moisés Elías Vargas Galofre.

Estima en sus apreciaciones la parte actora que las lesiones y pérdida de capacidad laboral del afectado *ha originado grandes perjuicios morales, daño a la salud, alteración grave a sus condiciones de existencia y perjuicios de tipo material* a los demandantes y que para el caso se suscita *una relación de causalidad entre la actividad del Estado y el daño causado, razón por la cual deben ser indemnizados por parte de la administración en los perjuicios que se les ocasionaron(...)"*.

### **2.3. Normas aplicables.**

La parte actora fundamenta sus pretensiones con base en las siguientes normas:

Constitución Política, artículo 90.

Ley 1437 de 2011, artículos 140, 155 y s.s.

### **2.4. Fundamentos de derecho.**

Manifiesta el apoderado en síntesis que, en el presente caso, al señor Moisés Elías Vargas Galofre se le ocasionaron daños antijurídicos provenientes de las lesiones y pérdida de capacidad laboral por el accidente de tránsito en el que se vio involucrado cuando regresaba a la unidad militar a la cual pertenecía, en la época en que prestaba su servicio militar obligatorio, lo cual ocasiona a los actores daños antijurídicos los cuales, considera el apoderado, le son imputables a las entidades demandadas.

### **2.5. Argumentos de la Defensa.**

#### **2.5.1. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.**

La entidad accionada contestó demanda en la oportunidad procesal para ello, y se opuso a las pretensiones, aduciendo que, para el caso la parte actora no ha demostrado cuales

son los elementos que estructuran la eventual responsabilidad contractual del Estado; que por el contrario, del contexto planteado en la demanda se deriva que las lesiones ocasionadas en la humanidad del soldado bachiller (r) Moisés Vargas Galofre derivan de la culpa exclusiva de la víctima, situación que exime de la responsabilidad al ente encausado. Añade que de los hechos de demanda *se desprende que se trató de un accidente común, toda vez que el actor se encontraba de permiso y conduciendo una motocicleta sin licencia de conducción, del cual no se deriva responsabilidad patrimonial del Estado, por cuanto no se configuran los elementos estructurales de la falla del servicio.*

En cuanto los hechos de la demanda, la entidad demandada señala que es son ciertas las afirmaciones que aluden a que el joven Vargas Galofre prestaba el servicio militar obligatorio como soldado bachiller al momento de la ocurrencia del accidente de tránsito que le ocasionó las lesiones cuyo resarcimiento reclama, y que se encontraba de permiso otorgado por la Comandancia de la unidad militar, empero, señala que el accidente de tránsito del que derivaron sus lesiones y secuelas, ocurrió cuando el entonces militar estaba conduciendo una motocicleta sin licencia de conducción, por ello no es cierto que el automotor en el que ocurrió el siniestro no fuera conducido por un tercero, sino por la misma víctima, siendo esta circunstancia un motivo de exclusión de responsabilidad del ente demandado, cual es la culpa exclusiva de la víctima, en tanto que así éste lo declaró bajo juramento en la Investigación Disciplinaria Nro. 007-2016 adelantada en contra del T.E. (Teniente Efectivo) Sánchez Franco Alexander, el día 19 de enero de 2016.

Agrega que, en razón de lo anterior, la causa de las lesiones sufridas por el soldado bachiller en retiro y de las que habla el Informativo Administrativo por Lesiones llevado a cabo por la unidad, son las que están establecidas en el literal “d” del artículo 24 del Decreto 1796 del 2000; que si los demandantes no estuvieron conformes con lo resuelto, bien pudieron hacer uso de los medios de impugnación, como lo es la solicitud de modificación dentro de los tres meses de proferida la decisión establecida en el artículo 26 del mismo Decreto. Además de ello, que es cierto que la Junta Médico Laboral de la Unidad de Sanidad Militar del Ejército Nacional determinó lo de la pérdida de capacidad laboral del joven afectado.

Como argumentos para su defensa la entidad encausada manifestó, entre otras cosas, lo siguiente:

“(…)

***Culpa exclusiva de la Víctima eximente de responsabilidad de la demandada***

*De acuerdo a las circunstancias antes probadas, es evidente que las lesiones del mencionado militar, no se produjo [sic] por falta del servicio de mi defendida, tampoco obedeció a la creación de un riesgo excepcional diferente o mayor al que afrontaban sus demás compañeros, sino por el contrario, la víctima participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, ya que con su reprochable conducta de no acatar las normas de tránsito, cual es conducir motocicleta sin licencia de conducción, sufre un accidente produciéndole las lesiones que padece, fueron producto de su propia imprudencia e impericia; el accidente ocurrió cuando la parte actora se encontraba de permiso, no fue en servicio.*

*Así las cosas, es evidente que el daño causado provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima, lo cual rompe el nexo de causalidad entre el daño y el actuar de la administración, por lo tanto, con esta ruptura, el daño no*

*puede ser imputable a mi defendida, ya que la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del soldado Bachiller, quien con su conducta se expuso de manera imprudentemente a sufrir el daño.*

*De acuerdo al informativo por lesiones emitido por la Unidad respectiva, se desprende claramente que las lesiones sufridas por el SLB MOISES ELIAS VARGAS GALOFRE, obedeció a la culpa exclusiva de la víctima. Está probado que el accidente de tránsito ocurrió cuando la víctima se desplazaba en la moto de su hermano, sin licencia de conducción. Si bien es cierto que la conducción es una actividad riesgosa o peligrosa, en el asunto en estudio, no se configuran los elementos estructurales de la falla del servicio, de la cual se derive responsabilidad del Estado, por cuanto si bien esta demostrado el daño, este no resulta imputable a la demandada, toda vez que la víctima fue determinante en el resultado de los hechos, circunstancia que rompe el nexo causal entre el daño y el hecho dañino, y surge una causa de exoneración de responsabilidad del Estado (...).”*

## **2.6. Actuación procesal.**

La demanda fue presentada el 23 de mayo de 2018, por reparto correspondió a este Despacho Judicial, y mediante auto de 9 de octubre de 2018, se admitió por reunir los requisitos de ley. El día 17 de agosto de 2018, se realizó audiencia inicial, decretándose las pruebas que se consideraron conducentes, pertinentes y útiles, citándose a las partes a audiencia de pruebas para el día 11 de septiembre de 2018.

Mediante auto de 30 de julio de 2020, se declaró precluido el periodo probatorio, dando traslado a las partes para que alegaran de conclusión.

## **2.7. Alegatos.**

Del término otorgado para alegar de conclusión hicieron uso la parte demandante y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército de Colombia.

### **2.7.1. Parte accionada Nación – Mindefensa – Ejército Nacional:**

En memorial allegado el 3 de septiembre de 2020, la Nación Ministerio de Defensa – Ejército Nacional señaló que, de las pruebas obrantes, en particular el informe derivado de la Investigación disciplinaria Nro. 007/2016 adelantada contra el señor TE (Teniente Efectivo) Sánchez Franco Alexander, quien ostentaba el cargo de comandante de la unidad Compañía *Daga* de la cual formaba parte el Soldado Bachiller Moisés Elías Vargas Galofre, que da cuenta del accidente en motocicleta sufrido por este último el 29 de noviembre de 2015 a las 15:30 Horas en el municipio de Galapa – Atlántico mientras se encontraba de permiso fuera de la unidad donde prestaba el servicio militar obligatorio, el mismo soldado es interrogado bajo juramento y declara que el accidente que le ocasionó múltiples incapacitantes lesiones ocurrió cuando estaba a los mandos de una motocicleta de propiedad de su hermano, lo cual ratificó en audiencia de pruebas celebrada a instancias del presente medio de control en fecha 25 de agosto de 2020.

En ese orden, considera el ente accionado, que no hay cabida para declarar la responsabilidad extracontractual del ente castrense, por considerar que para el caso se configura la culpa exclusiva de la víctima, por su *actuar imprudente* que produjo el accidente del que derivaron sus lesiones, ello en la realización de actividades ajenas al servicio militar, en tanto que demostró en el proceso que se le hubiere encomendado

alguna misión o actividad inherente al rango que desempeñaba como soldado bachiller que implicara conducir una motocicleta.

#### **2.7.2. Parte demandante:**

Básicamente, la parte actora se ratificó en los argumentos expuestos en el libelo demandatorio e insistió en que se encuentran probados en el proceso los hechos señalados y que, el mero hecho de encontrarse el soldado disfrutando de un permiso otorgado por los cuadros de la unidad en la que prestaba el servicio militar el afectado señor Vargas Galofre, es suficiente para determinar que al haber sido otorgado el permiso, el militar sufrió las lesiones por causas imputables a dicho ente.

#### **2.7.3. Ausencia de pronunciamiento del Ministerio Público:**

En esta oportunidad, la Procuradora Judicial 173 Judicial I, Para Asuntos Administrativos no rindió concepto.

### **3. Control de legalidad.**

Se destaca que revisadas cada una de las actuaciones surtidas no se avizora irregularidad que afecte de nulidad el trámite cumplido hasta este momento, por lo que se considera que se encuentra cumplido satisfactoriamente y sin novedad el control de legalidad.

### **4.- Consideraciones.**

Siendo el Despacho competente para conocer del presente proceso y no observándose irregularidad que pueda configurar causal de nulidad procesal, se pasa a dictar la sentencia correspondiente, a fin de resolver el siguiente:

#### **4.1. Problema jurídico.**

De acuerdo con la fijación del litigio realizada en audiencia inicial celebrada el 22 de agosto de 2019, el problema jurídico se contrae en determinar, si la Nación - Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional es administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios morales y materiales ocasionados a los demandantes, como consecuencia del accidente de tránsito sufrido por Moisés Elías Vargas Galofre, en la época en que prestaba su servicio militar obligatorio, mientras éste se encontraba de permiso.

#### **4.2. Tesis del Despacho.**

El Despacho sustentará la tesis que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, no son administrativamente responsables por los hechos ocurridos el día 29 de noviembre de 2015, en donde resultó herido el señor Moisés Vargas Galofre, en un accidente de tránsito al momento de transportarse en una motocicleta particular, de propiedad del señor Francisco Berdugo De Vega, al encontrarse de permiso otorgado por el comandante de la base militar y por el suboficial que se encontraba de control en la unidad militar, del Batallón No. 2 del Ejército Nacional, al no haberse demostrado fehacientemente la configuración del daño antijurídico que sea imputable a la entidad demandada, por no existir suficientes elementos de convicción que así lo demostraran.

#### **4.3. Hechos probados.**

.- La relación filial entre el señor Moisés Vargas Galofre y los demás demandantes dentro de este proceso (fls. 35 al 52 del cuaderno 1 del expediente digital).

.- Que el señor Moisés Vargas Galofre prestó el servicio militar obligatoria en el Batallón de Servicios No. 2, siendo integrante del tercer contingente de 2015, según certificado expedido por el jefe de Personal del Batallón de Policía Militar (fl. 57 del cuaderno 1 del expediente digital).

.- Que mediante informativo administrativo de 20 de enero de 2016, se manifestó lo siguiente (fl. 60 del cuaderno 1 del expediente digital):

*“5. A. De acuerdo con el informe rendido por el señor TE. SANCHEZ FRANCO ALEXANDER, comandante de compañía DAGA, manifiesta los hechos ocurridos el 29 de noviembre siendo aproximadamente las 15:30 horas SLB. VARGAS GALOFRE MOISES ELIAS, identificado con cedula N° 1.047.236.577. Quien se encontraba de permiso autorizado por el comando de la compañía sufre accidente en moto particular en el municipio de galapa atlántico, es llevado por urgencia a la clínica EL SOL LTDA ubicada en la ciudad de Barranquilla Atlántico de acuerdo a EPICRISIS el días 29 de noviembre 2015 15 30 horas ingresa paciente señor MOISES ELIAS VARGAS GALOFRE Identificado con cedula No1 04723557 por accidente de tránsito en vía pública con trauma Raquiomedular dorsal Lesión medular dorsal presentar fracturas de cuerpo vertebrales. Fractura de radio y cubito distal izquierdo Valorado por ortopedista.  
(...).”*

.- Epicrisis del señor Moisés Vargas Galofre llevado por el Instituto de Neurociencias Clínica del Sol Ltda., donde se evidencias las diferentes lesiones sufridas por el soldado Vargas Galofre en su humanidad, como lo son politraumatismos, trauma raquiomedular dorsal, fracturas de cuerpo vertebral dorsales T-4 y T-5 y listesis grado I en T-3 T-4 (fls. 63 al 65 del cuaderno 1 del expediente digital).

.- Que a través del Acta de Junta Médica laboral No. 91861 de 25 de noviembre de 2016, se manifestó lo siguiente (fls. 67 al 70 del cuaderno 1 del expediente digital):

***“C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.***

*LE PRODUCE UNA DISMINUCION DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL CIENTO POR CIENTO (%100)*

***D. Imputabilidad del Servicio.***

*LESION-1 EN ACTOS REALIZADOS CONTRA LA LEY EL REGLAMENTO O LA ORDEN SUPERIOR, ACCIDENTE COMUN LITERAL (D) (AC) SEGÚN IAL 001/2016 POR BAPOM.02.*  
*(...).”*

.- Declaración jurada del señor Francisco Berdugo de Vega ante la Notaría Única del Circuito de Galapa, en la que manifiesta, entre otras cosas, lo siguiente (fls. 73 al 74 del cuaderno 1 del expediente digital):

*“Es mi voluntad manifestar bajo la gravedad del juramento que el día 29 de noviembre del año 2015, siendo aproximadamente las 3:00 pm, llevaba en mi vehículo Motocicleta marca BAJAJ, modelo: 2016, placa. UXE-010, al señor Moisés Elías Vargas Galofre, identificado con la cédula número 1.047.*



*236.577 expedida en Galapa, Atlántico, quien se dirigía a la Base Militar, se atravesó un perro, haciéndome perder el control de la motocicleta, como consecuencia, nos caímos y el señor MOISES ELIAS VARGAS GALOFRE, cayó sobre un andén, causándole fractura de columna, quedando imposibilitado para moverse. En ese momento, no llegó ningún tipo de autoridad o entidad médica. La comunidad que transitaba en ese momento, nos prestó auxilio y nos levaran en vehiculó particular a la CLINICA EL SOL ubicada en la ciudad de Barranquilla...”*

.- Expediente Administrativo contentivo del Proceso Disciplinario Formal Radicado No. 007- 2016 de Batallón de Policía Militar No. 2 contra el Teniente Efectivo Sánchez Franco Alexander radicado SIJUR 2501090, de fecha de iniciación 23 de mayo de 2016, donde se destacan: **i)** Copia de la minuta de anotaciones de la unidad militar en fecha 29/11/2015, en particular (fls.35-42) **ii)** Declaraciones juradas que rinden el Teniente Efectivo Alexander Sánchez Franco sobre el permiso otorgado al Soldado Bachiller Vargas Galofre para salir durante nueve horas de la Base Militar ubicada en Granabastos - Malambo y el accidente sufrido por éste último, dentro de la indagación preliminar de la referencia (folios 133,134) y la declaración del Cabo Segundo César Edgardo Hidalgo López (fls. 137-139); el DE (Soldado Bachiller) Eli Samuel García Leal (fls.141-143), Jhon Édinson Arco López (fls.145-147) Luis Armando Millán Roperó (fls.149-151) **iii)** Declaración jurada rendida por el señor Moisés Elías Vargas Galofre del 19 de enero de 2016, dentro de la cual declara las circunstancias en que sucedió el accidente en el que quedó lesionado (fls.165-167), así como el Informativo Administrativo por Lesiones del 20 de enero de 2016, con el concepto del comandante de la unidad militar (fl.173) y auto de apertura de investigación contra el comandante de la Base de Granabastos (fls.297-309).

-. Declaración de parte que rindió el señor Moisés Elías Vargas Galofre a instancias de la audiencia de pruebas celebrada el día 24 del mes de agosto de 2020, de la que se extraen los siguientes apartes más relevantes <sup>1</sup>:

- Minuto 12:59 de la grabación El actor rinde su declaración y es interrogado por la Titular del Despacho. Allí describe las afectaciones y secuelas producidas por el accidente, en particular, el trauma raquiomedular y la imposibilidad de usar sus extremidades inferiores para la marcha, que no siente nada del tórax hacia abajo y que debe usar pañales por presentar incontinencia.
- Minuto 16:18 al minuto 27:31 de la grabación: Hace un recuento breve de los hechos alusivos al accidente sufrido el 29 de noviembre de 2015 a bordo de una motocicleta y comenta que una vez producido el siniestro fue socorrido por vecinos del sector y que no hubo autoridad alguna que se haya encargado del accidente, además que permaneció hospitalizado dos meses y medio y que hubo varios periodos de su convalecencia que no fueron debidamente atendidos por la entidad demandada, que estuvo desprotegido en su salud.
- Minuto 28:09 al minuto 32:35 de la grabación: el apoderado demandante pregunta al señor Moisés Elías Vargas Galofre sobre las circunstancias del permiso y su duración, la boleta de salida. El declarante expresa que para el momento de los hechos se encontraba de permiso debidamente autorizado por su superior directo y por el Comandante de la unidad militar, que como condición para el otorgamiento del permiso de salida, que era desde las 06:00 a las 16:00 horas, debía como condición traer consigo a la unidad una resma de papel y un recipiente con pintura.

---

<sup>1</sup> Véase el archivo de la grabación de la audiencia de pruebas, celebrada del 24 de agosto de 2020.

- Minuto 32:55 La apoderada del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional procede a indagar al demandante sobre la procedencia y titularidad de dominio de la motocicleta donde se siniestró el demandante y éste contesta que dicho vehículo es de propiedad de un vecino, amigo de éste y novio de su hermana; asegura que la motocicleta no la manejaba. La apoderada concluye el contrainterrogatorio al declarante al minuto 34:12 de la vídeo llamada.

.- Testimonio del señor Wilmer Alexander Hurtado Pedraza, en el cual hizo referencia a los hechos objeto de demanda (fls.1 al 3 del cuaderno 6 del expediente digital y el archivo en audio y vídeo de la audiencia de pruebas virtual, celebrada el 24 de agosto de 2020). De la declaración del mencionado testigo se extraen los siguientes apartes relevantes:

- Minuto 34:24 de la vídeo llamada: Expresó que el accidente tuvo lugar en la vía que del corregimiento de Guaimaral conduce al casco urbano del Municipio de Galapa - Atlántico, y que ocurrió por haberse atravesado un perro, que al maniobrar intentando esquivarlo, el conductor perdió el control de la motocicleta y éste y el señor Moisés Elías Vargas Galofre cayeron al piso y de ahí derivan las lesiones del ex militar.

.- No se anexa al expediente croquis del accidente o el informe técnico del mismo por parte de autoridad de policía o tránsito, correspondiente al accidente en el que se vio involucrado el señor Moisés Vargas Galofre y del que resultaron las afectaciones en su salud.

#### **4.4.- Marco normativo y jurisprudencial.**

##### **4.4.1. De los elementos de la responsabilidad Estatal.**

De conformidad con el artículo 90<sup>2</sup> de la Constitución Política de Colombia “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”, norma de la que surgen como elementos de la responsabilidad estatal: el daño antijurídico y la imputación. Como metodología de la exposición, el Despacho estudiará la configuración de los elementos de manera consecuente, es decir analizará primero la configuración del daño como un primer elemento y en caso de su concreción considerará si el mismo es imputable al Estado.

##### **4.4.2.- Daño antijurídico.**

El concepto del daño comprende para la doctrina del derecho administrativo todo lo que se deriva de un hecho u omisión de la administración y que no sea soportable para el administrado, bien porque contraría el ordenamiento jurídico o porque resulta irracional al violar los derechos fundamentales. Al respecto, el Honorable Consejo de Estado ha manifestado que:

*“[L]a noción de daño antijurídico es un concepto constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo ha señalado la Sala un ‘Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos’. Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente*

---

<sup>2</sup> Constitución Política de Colombia. Artículo 90. *El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste*

*o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida.*

*“En este orden de ideas, ‘el daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil.’”<sup>3</sup>*

#### **4.4.3. Soldado Regular – Conscripto – Soldado Profesional. Regímenes de responsabilidad extracontractual aplicable.**

En cuanto a la responsabilidad extracontractual que le cabe al Estado colombiano en relación con los militares activos en la Fuerza Pública, para el caso de los soldados, existe una clara diferencia entre un soldado conscripto (sea éste regular, campesino o bien bachiller) y soldado profesional / soldado voluntario.

Así, al interior de cada una de las instituciones que integran las fuerzas militares de Colombia, se crean organismos Ejército y Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana – FAC- encargados de velar por la defensa y el orden de la Nación<sup>4</sup>. En tales instituciones, el tipo de vinculación con el Estado, del rango militar básico está conformado por los soldados, así:

- a) Soldados profesionales o Voluntarios: Establecidos en el artículo 1º del Decreto 1793 de 2000, para tales militares, el deber de sujeción del Estado frente a éstos surge de una relación o vínculo legal y reglamentario que se ha consolidado mediante la decisión administrativa de nombramiento y la posesión respectiva, tal como lo señala el artículo 3º de la norma en comento.
- b) Soldados conscriptos o soldados regulares: el vínculo con el Estado surge del cumplimiento del deber expresado en el artículo 216 de la Constitución Política, el cual señala la obligación de todo colombiano de empuñar las armas *“cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”*. Tal precepto constitucional está desarrollado actualmente por la Ley 1861 de 2017 (*Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización.*) Para el momento de la ocurrencia de los hechos de la demanda, el régimen jurídico aplicable para los soldados conscriptos era la Ley 48 de 1993, norma ésta que señalaba que en contrapartida por el servicio militar el reclutado tiene derecho a que el Estado supla sus necesidades básicas de alojamiento, salud, manutención, vestuario, bienestar y a una bonificación monetaria mensual, que no constituye salario, entre otros beneficios<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de mayo 8 de 2013. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicación: 70 001 23 31 000 2000 00252 01 (26111).

<sup>4</sup> El artículo 217 de la Constitución Política señala:

*“Artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.*

*La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio”.*

<sup>5</sup> Artículos 10,14,38 y 39 de la Ley 48 de 1993, hoy artículos 45 y 44 de la Ley 1861 de 2017.

De los anteriores postulados normativos en cita, deriva que, existen una serie de obligaciones correlativas del Estado para con el ciudadano que presta el servicio militar, bien sea obligatorio o bien profesional / voluntario, ese tipo de obligaciones estatales para con ese tipo de militares, se le denomina *deber de sujeción*.

Ahora bien, en lo que atañe a la responsabilidad patrimonial del Estado frente a quienes detentan la calidad de conscriptos, es decir, quienes están prestando el servicio militar obligatorio, el régimen aplicable que ha impuesto la línea jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado es diferente frente al de los demás militares, sean éstos de carrera o bien soldados voluntarios / profesionales. Esa línea es aquella que ha destacado que:

*“(…) quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado, como los militares, agentes de policía o detectives del DAS, deben soportar los daños causados como consecuencia de los riesgos inherentes a la misma actividad y sólo habrá lugar a la reparación cuando dicho daño se haya producido por falla del servicio, o cuando se someta al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar los demás compañeros. En todo caso, el funcionario y quienes hayan sufrido perjuicio con el hecho tendrán derecho a las prestaciones e indemnizaciones previamente en el ordenamiento jurídico (a forfait)”<sup>6</sup>*

En igual sentido, el Órgano de Cierre ha establecido que cuando se trata de un recluta que ingresa al servicio militar obligatorio, en buenas condiciones de salud, deberá dejar el servicio en condiciones similares, tesis a partir de la cual se estableció la obligación de reparación a cargo del ente castrense, de seguridad o policial respectivo, frente a los daños que sufra un conscripto, siempre y cuando la causa de tales daño esté relacionada con la prestación del servicio y se excedan la restricción de los derechos y libertades inherentes a la condición de militar.

En ese orden, el Consejo de Estado ha establecido para la solución de cada caso en concreto, los distintos regímenes de responsabilidad del Estado, siendo el de daño especial, cuando para el asunto se ha quebrantado el principio de igualdad frente a las cargas públicas cuando, por ejemplo, se le ha impuesto al soldado conscripto una carga mayor a la que está obligado a soportar; bien el de la falla probada, cuando por acción irregular u omisión de la autoridad castrense se suscita el daño antijurídico; y la responsabilidad extracontractual del Estado por riesgo excepcional, cuando el daño o lesión del soldado conscripto tiene su origen en actividades peligrosas, inherentes al servicio militar.<sup>7</sup>

Ahora bien, frente a tales regímenes aplicables, la Máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo ha establecido que los causales para exonerar al Estado de la responsabilidad son el caso fortuito, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero.

Tales afirmaciones, cobran plena vigencia en la actualidad, como bien se expone, en la sentencia del 27 de abril de 2016, donde la Sección Tercera Subsección A, destacó<sup>8</sup>:

#### ***“5.- Régimen aplicable a los soldados conscriptos***

<sup>6</sup> Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia del 21 de febrero de 2002, Expediente 12.799.

<sup>7</sup> Consejo de Estado, sentencia del 28 de abril de 2005, Expediente 15.445.

<sup>8</sup> Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera Subsección A Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 50001-23-31-000-2003-00294-01(36.215)

La Sala estima necesario precisar la diferencia existente entre la clase de vínculo que se crea para el Estado frente a los soldados que prestan servicio militar obligatorio y los soldados voluntarios o profesionales; en el primero, el vínculo surge debido al cumplimiento del deber constitucional de defensa de la independencia, de la soberanía nacional y de las instituciones públicas, en el cual no hay carácter laboral alguno, en tanto que en el segundo (soldado profesional) el vínculo surge en virtud de una relación legal y reglamentaria consolidada a través del correspondiente acto administrativo de nombramiento y la consiguiente posesión del servidor o de la relación contractual creada mediante la suscripción de un contrato laboral.

Por tanto, a diferencia del soldado profesional, que ingresa en forma voluntaria a las filas del Ejército con el fin de prestar un servicio a cambio de una contraprestación y que goza de una protección integral de carácter salarial y prestacional, el soldado que presta servicio militar obligatorio se ve impelido a hacerlo por la imposición de una carga o gravamen especial del Estado.

El soldado que presta el servicio militar obligatorio no goza de protección laboral predeterminada frente a los riesgos a los cuales se le somete en cumplimiento de su cometido constitucional, por cuanto la ley tan solo le reconoce algunas “prestaciones”, las cuales de ningún modo pueden catalogarse como laborales y tampoco se asimilan al régimen a for fait previsto por la ley para los soldados profesionales.

Ahora bien, en relación con el título de imputación aplicable a los daños causados a soldados que prestan servicio militar obligatorio, la Sala ha establecido que los mismos pueden ser **i) de naturaleza objetiva –tales como el daño especial o el riesgo excepcional– y ii) por falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al respectivo proceso se encuentre acreditada la misma.**

Al respecto, la Sala ha sostenido<sup>9</sup>:

**“Atendiendo a las condiciones concretas en las que se produjo el hecho, la Sala ha aplicado en la solución de los casos, los distintos regímenes de responsabilidad. Así, ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas<sup>10</sup>; el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y, el de riesgo cuando éste proviene o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos; pero, en todo caso, ha considerado que el daño no será imputable al Estado cuando se haya producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, por rompimiento del nexo causal. En providencia de 2 de marzo de 2000, dijo la Sala:**

**‘... demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio militar, durante el mismo y en desarrollo de**

<sup>9</sup> Sentencias del 30 de julio de 2008, exp. 18.725, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y del 23 de abril de 2009, exp. 17.187, reiteradas en la sentencia del 9 de abril de 2014, exp 34.651. M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

<sup>10</sup> Cita del original: En sentencia de 10 de agosto de 2005, exp: 16.205, la Sala al resolver la demanda instaurada con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por las lesiones sufridos por un soldado, quien en cumplimiento de la orden proferida por su superior jerárquico, de realizar un registro de área en horas de la noche, al saltar un caño se cayó y golpeó contra una piedra, consideró: “...la causación de los daños material, moral y a la vida de relación tienen sustento, en este proceso, en el actuar de la Administración de sometimiento del soldado conscripto a una carga mayor a la que estaba obligado a soportar, cuando en el cumplimiento de la misión conferida a él por el Comandante del Escuadrón B de Contraguerrillas de registro del área general del Municipio de Paz de Ariporo dentro del servicio y con ocasión de él, se tropezó cayendo contra la maleza, lesionándose el ojo derecho”.

*actividades propias de él, puede concluirse que aquél es imputable al Estado. En efecto, dado el carácter especial de esta situación, por las circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al Estado la protección de los obligados a prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se creen como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen. No será imputable al Estado el daño causado cuando éste haya ocurrido por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, eventos cuya demostración corresponderá a la parte demandada<sup>11</sup>".*  
*(Negrillas adicionales).*

*Frente a los perjuicios ocasionados a soldados regulares, en la medida en la cual su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado, al someterlos a la prestación de un servicio que no es nada distinto a la imposición de una carga o un deber público, resulta claro que la organización estatal debe responder, bien porque frente a ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tengan la obligación jurídica de soportar; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al cual normalmente estarían sometidos, y que puede tener origen en el riesgo de la actividad o en el riesgo de la cosa, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial<sup>12</sup>(...)"*.

En lo que atañe a los títulos de imputación aplicables a la responsabilidad extracontractual del Estado por daños ocasionados a los conscriptos, mencionó el Consejo de Estado lo siguiente:

*: "Pueden ser i) de naturaleza objetiva –tales como el daño especial o el riesgo excepcional- y ii) por falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al proceso ésta se encuentre acreditada. Adicionalmente, en aplicación del principio iura novit curia, esta Corporación ha señalado que el juzgador debe verificar si el daño antijurídico resulta imputable al Estado con fundamento en uno cualquiera de los títulos de imputación antes mencionados.*

*Pues bien, el daño especial opera cuando se produce un rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas. Por su parte, el riesgo excepcional se da como consecuencia de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que, en su estructura, son peligrosos. A su turno, la falla en la prestación del servicio surge cuando la irregularidad administrativa produce el daño. En todo caso, éste no resulta imputable al Estado cuando ocurre por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, circunstancia que lleva al rompimiento del nexo causal y lo libera de responsabilidad.* (Subrayado por el Juzgado)

*En los casos en que se invoque, por parte de la entidad demandada, la existencia de una causa extraña como generadora del daño, será necesario analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que éste se produjo, pues es posible que el Estado haya contribuido co-causalmente a su generación; por lo tanto, la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material de los daños ocasionados a conscriptos no es suficiente para que éstos (los daños) sean considerados como no atribuibles a la Administración Pública, pues se requiere, además, que ésta acredite que su actuación no contribuyó a su producción, por lo cual no le sería imputable fáctica ni jurídicamente".<sup>13</sup>*

<sup>11</sup> Cita del Original: Expediente 11.401.

<sup>12</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia del 15 de octubre de 2008. Exp. 18586. M.P. Enrique Gil Botero, reiterada por la Subsección A, a través de sentencia del 10 septiembre de 2014, exp. 32.421 M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón (E).

<sup>13</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de septiembre de 2013, expediente 98. 468.

Del precitado extracto de jurisprudencia, se extrae que, los daños causados a un conscripto pueden ser, en principio, de naturaleza objetiva, bien sea por daño especial o riesgo excepcional, siendo el primero un rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas y el segundo una consecuencia de la realización de actividades peligrosas o de el uso artefactos peligrosos.

De otro lado, refiere que los daños también pueden ser ocasionados por falla del servicio, siempre y cuando, de los hechos y de las pruebas allegadas al proceso, dicha falla se encuentre acreditada, puesto que, de no ser así, el Estado podrá exonerarse de la responsabilidad alegando cualquiera de los causales eximentes de la responsabilidad, como lo son el caso fortuito, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima y hecho exclusivo y determinante de un tercero.

#### **4.4.4. Sobre la obligación que le asiste al extremo activo del proceso de demostrar la falla del servicio alegada – *onus probandi* – normatividad y jurisprudencia aplicable.**

En materia probatoria, la Ley 1437 de 2011, señala en su artículo 212 que para que las pruebas puedan ser apreciadas por el operador judicial, éstas deberán aportarse, solicitarse, practicarse e incorporarse en la debida oportunidad procesal; es decir, en la demanda y su contestación, reforma y respuesta respectiva; la demanda de reconvención y su respuesta, al momento de proponer excepciones y descorrer el traslado de las mismas, entre otras disposiciones.

Por su parte, el artículo 211 de la citada Ley, contempla que, en materia probatoria, en lo que no esté regulado por dicha Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012). Esta última norma señala que toda decisión judicial se fundará en pruebas *regular y oportunamente allegadas al proceso* (artículo 164 – principio de la necesidad de la prueba).

Por su parte, el artículo 167 *Ibidem*, señala que *Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (...)*”.(principio del *onus probandi incumbit actore*)

Como se mencionó en precedencia, el artículo 90 de la Carta Política establece en su inciso primero que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos ocasionados a sus asociados, derivados de acciones u omisiones de sus autoridades, empero, esta norma superior no debe entenderse en su estricto sentido gramatical, siendo el enfoque sistemático de la misma lo que nos permite establecer sus alcances al ser tenida en cuenta con otras normas superiores.

En ese sentido, la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, ha conceptuado la responsabilidad extracontractual del estado en la sentencia C -333 de 1996<sup>14</sup>, donde la Máxima Instancia Constitucional señaló:

*“(…) Por ello, el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización. Igualmente, no basta que el*

---

<sup>14</sup> Referencia: Expediente D-1111 Norma acusada: Artículo 50 (parcial) de la Ley 80 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. 1º de agosto de 1996.

*daño sea antijurídico, sino que éste debe ser además imputable al Estado, es decir, debe existir un título que permita su atribución a una actuación u omisión de una autoridad pública”.*

#### **4.5.- Caso concreto.**

En el presente proceso, se encuentra demostrado el daño sufrido por el señor Moisés Vargas Galofre, en el accidente de tránsito ocurrido el día 29 de noviembre de 2015, según se manifiesta en el informativo administrativo de lesiones del 20 de enero de 2016, en el cual se expuso lo siguiente:

*“5. A. De acuerdo con el informe rendido por el señor TE. SANCHEZ FRANCO ALEXANDER, comandante de compañía DAGA, manifiesta los hechos ocurridos el 29 de noviembre siendo aproximadamente las 15:30 horas SLB. VARGAS GALOFRE MOISES ELIAS, identificado con cedula N° 1.047.236.577. Quien se encontraba de permiso autorizado por el comando de la compañía sufre accidente en moto particular en el municipio de Galapa atlántico, es llevado por urgencia a la clínica EL SOL LTDA ubicada en la ciudad de Barranquilla Atlantico de acuerdo a EPICRISIS el días 29 de noviembre 2015 15 30 horas ingresa paciente señor MOISES ELIAS VARGAS GALOFRE Identificado con cedula No1 04723557 por accidente de tránsito en via pública con trauma Raquimedular dorsal Lesion medular dorsal presentar fracturas de cuerpo vertebrales. fractura de radio y cúbito distal izquierdo Valorado por ortopedista.”*

Igualmente, está demostrado que las lesiones sufridas en la humanidad del Soldado Bachiller Moisés Elías Galofre Vargas, le han ocasionado un 100% de pérdida de capacidad laboral, según lo manifiesta el Acta de Junta Médica Laboral No. 91861 de 25 de noviembre de 2016, en donde se plasmó que:

#### ***“C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.***

*LE PRODUCE UNA DISMINUCION DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL CIENTO POR CIENTO (%100)*

#### ***D. Imputabilidad del Servicio***

*LESION-1 EN ACTOS REALIZADOS CONTRA LA LEY EL REGLAMENTO O LA ORDEN SUPERIOR, ACCIDENTE COMUN LITERAL (D) (AC) SEGÚN IAL 001/2016 POR BAPOM.02.*  
*(...).”*

Se concluye entonces, que el señor Moisés Vargas Galofre, sí sufrió un daño a partir de los hechos ocurridos el día 29 de noviembre de 2015, en donde sufrió un accidente a bordo de una motocicleta.

#### **4.5.3.- Imputación del daño – falta de elementos probatorios.**

Para el asunto en examen, se tiene que, la parte actora no demostró que el hecho dañoso fuera imputable a la encausada Nación Mindefensa – Ejército Nacional, es más, no hizo un uso razonable y suficiente de los medios probatorios previstos en la ley para acreditar, por un lado, las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en que sucedió el accidente de tránsito del que derivaron las lesiones y afectaciones en la humanidad del señor Moisés Elías Galofre Vargas y de cara a esta situación, no probó que el daño causado fuera el resultado de la conducta atribuida a la entidad demandada.



Lo anterior, en tanto que el extremo activo del contradictorio no demostró que las circunstancias específicas que rodearon el accidente sugerían la responsabilidad de la encausada, ni siquiera se allegó informe elaborado por la autoridad de tránsito del municipio de Galapa, elaborado por la autoridad competente, que hubiese registrado los pormenores del mismo. De igual manera, brilla por su ausencia la actuación penal adelantada por la autoridad competente derivada de la eventual conducta punible de *“lesiones personales en accidente de tránsito”*, comoquiera que hubo un accidente de tránsito del que derivaron serias lesiones en la humanidad del soldado; igualmente, se observa que la parte actora no allegó la tarjeta de propiedad del vehículo causante del siniestro, ni hubo interés de su parte en que fuera solicitada en el término probatorio, de modo que tampoco está probada la propiedad del vehículo, pues se dice que es un vehículo particular; en ese orden, queda claro que la titularidad del mismo es ajena a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.

Ahora bien, el Informativo Administrativo por Lesiones del 20 de enero de 2016, con el concepto del comandante de la unidad militar da cuenta que el militar afectado, para el día en que ocurrieron los hechos, se encontraba *“disfrutando de un permiso”*(página 60 del archivo *01 Demanda Y Anexos.pdf*), lo cual también precisó la parte actora en los hechos de la demanda y en las declaraciones en la audiencia de pruebas, de modo tal que la sola afirmación hecha en el informe, no es suficiente para dar por establecida la responsabilidad de la administración, que la parte actora pretende señalar como de naturaleza objetiva, lo cual no es del caso, como bien quedó señalado en precedencia.

Así entonces, para el asunto en examen no basta demostrar el daño, pues, como quedó expuesto, aún en los regímenes de responsabilidad objetiva, deberán estar presentes tanto el hecho dañoso imputable a la administración, como el nexo con el servicio, lo que no ocurrió en este caso. En efecto, la parte actora no demostró que el alegado hecho dañoso resultara imputable a la administración, o que su conducta, constituyera la causa eficiente del daño, puesto que no existe prueba alguna que permita inferir la participación directa o indirecta de la encausada en el hecho generador del daño, y en ese sentido, no se probó que su conducta fuera determinante en la causación del hecho dañoso, por el contrario, se desconocen buena parte de las circunstancias que rodearon el accidente.

Bajo el anterior contexto fuerza negar las pretensiones de la demanda.

#### **4.5.3. Costas.**

El Despacho no condenará en costas a la parte vencida, por cuanto no se encuentra acreditado que las partes generaran actuaciones y gastos procesales sujetos de tasación en costas, tal como lo dispone el numeral 8º. Del artículo 365 del C.G.P. en concordancia con el art. 188 del C.P.A.C.A.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Barranquilla, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley,

### **5. FALLA:**

**PRIMERO: DESESTIMAR** las pretensiones de la demanda, por las razones previamente expuestas.

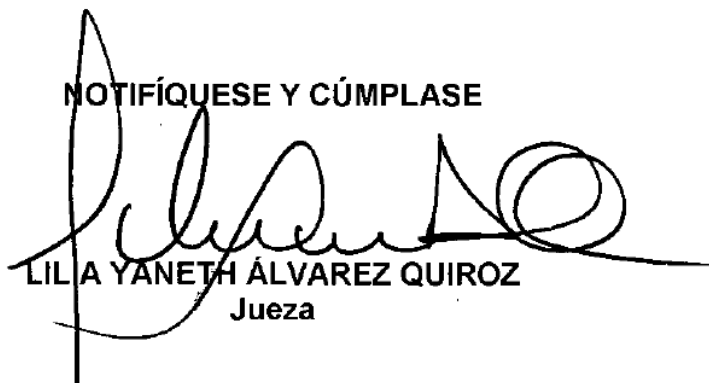
**SEGUNDO:** Sin costas, de conformidad con el artículo 188 del C.P.A.C.A.

**TERCERO:** Notifíquese el presente fallo a la señora Procuradora Delegada ante este Despacho.

**CUARTO:** Una vez ejecutoriada esta sentencia, archívese el expediente.

**QUINTO:** Se ordena la expedición de copias que soliciten las partes conforme a lo previsto en el artículo 114 del C.G.P.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**LILA YANETH ÁLVAREZ QUIROZ**  
Jueza

A.C.O.